

EL PROBLEMA

En los últimos días, la crisis de legitimidad política, jurídica y social que padece el régimen de Juan Orlando Hernández se ha visto incrementada de manera por demás preocupante. Los escándalos de corrupción en permanente escala ascendente, las impactantes revelaciones de nuevos y viejos testigos e inculpados en tramas de corrupción y redes criminales dedicadas al saqueo sistemático de los fondos públicos, más la sorpresiva captura y rápido enjuiciamiento del abogado, ex diputado del Partido Nacional y hermano menor del Presidente de la República, Antonio “Tony” Hernández, en la norteamericana ciudad de Miami por agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), han sido golpes muy fuertes propinados a la ya endeble y cuestionada legitimidad y credibilidad públicas del gobierno que encabeza Juan Orlando Hernández.

Por si todo esto fuera poco, una masiva caravana de emigrantes emprendió su larga marcha a mediados del mes de octubre en el norte del país y comenzó un duro peregrinar que ha concluido en la frontera sur de los Estados Unidos. Miles de compatriotas, cargando sus propias miserias y arriesgándolo todo, abandonaron el país en búsqueda de mejores condiciones de vida y huyendo de la violencia, el desempleo y el hambre. Ante los ojos del mundo, el éxodo hondureño reflejó de manera clara y contundente la dimensión del drama y la tragedia que viven miles de compatriotas en su propio país. Cuando el pueblo huye, el gobierno ya no existe, dijo Martí.

Nacido en la bruma asfixiante de un fraude electoral, con represión, muerte y condena internacional incluídas, el gobierno actual no ha podido reconstruir niveles de gobernabilidad aceptables que le permitan una gestión administrativa normal y funcional. Esta atrapado en su propia lógica ilegal y caótica.

En tales circunstancias, como era de esperar, el escenario local está cargado de rumores, especulaciones, vaticinios, tan lúcidos como inverosímiles, intrigas y comentarios de todo tipo que tienen como común denominador el destino inmediato del régimen juanorlandista y las diferentes opciones para salir de la crisis en que estamos sumidos, sobre todo después del descarado robo electoral de noviembre del año pasado.

El problema principal, entonces, consiste en la posibilidad real de que el gobierno logre concluir su periodo en enero del año 2022 o, por el contrario, se vea obligado a permitir elecciones anticipadas y la formación de un gobierno de transición que facilite la eventual salida del conflicto poselectoral y la posible solución de la crisis general.

EL CONTEXTO

La fragilidad del gobierno y su ausencia casi total de legitimidad institucional, se producen en un contexto de grave crisis de gobernabilidad democrática. Las instituciones, carentes de credibilidad y fortaleza política, se han mostrado incapaces para procesar en forma democrática la conflictividad político-electoral que enfrenta el país. Existe una sensación de fracaso, de frustración y desesperanza.

En tales circunstancias, el gobierno ve como cada día su imagen se deteriora más y más, tanto a nivel local como en el ámbito regional e internacional. Honduras da la impresión de padecer un Estado degradado, a punto ya de convertirse en fallido.

La publicitada unidad del partido gobernante y la supuesta fortaleza del liderazgo de Hernández, han quedado al desnudo y mostrado sus limitaciones y fisuras. El régimen atraviesa por su peor momento en cuanto a crisis de legitimidad y confianza pública. La reciente detención en Miami de Antonio “Tony” Hernández ha servido, entre otras cosas, para revelar el nivel de profundidad que han alcanzado las redes del crimen organizado, especialmente del narcotráfico, en los engranajes del Estado y en los círculos más elevados de las élites políticas. Estado degradado, Estado fallido, Narcoestado, son términos que se han vuelto comunes en el lenguaje político local, cada vez que se hace referencia a la situación del país y a su lamentable estado de postración y descrédito.

En un contexto semejante, la sociedad vive en una especie de angustia colectiva, siempre a la espera del próximo

escándalo de corrupción, con el temor inherente al clima de inseguridad y violencia que predomina por doquier. Esta ansiedad constante se traduce en clamor por un cambio, un relevo necesario, una sustitución de los actuales actores gobernantes por una generación nueva de políticos menos contaminados, más comprometidos con la decencia, el progreso y el bienestar de la gente. Honduras urge de un cambio profundo y real, que remueva las viejas estructuras y abra caminos nuevos, senderos de esperanza y transformación.

LAS IMPLICACIONES

La situación actual que vive el país no puede ni debe prolongarse más. La sociedad no puede seguir viviendo en las actuales condiciones. El país deja de ser viable y se convierte en una olla de presión a punto de estallar. Las implicaciones pueden ser muy graves y socialmente peligrosas.

Como suele decirse, la paciencia tiene un límite. Los niveles de conflictividad social y política van en aumento. Así lo reflejan las confrontaciones sociales en diferentes partes del territorio nacional, muchas de ellas originadas por un mal manejo y opaca gestión de los recursos naturales de las comunidades. Las tomas de calles y carreteras, cada vez más frecuentes e intensas; los constantes enfrentamientos con las fuerzas policiales, las protestas estudiantiles, los desalojos violentos, las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos y menores tarifas, en fin. Todo indica que el país está viviendo una gradual exacerbación de los conflictos sociales, lo que puede desembocar en preocupantes estallidos de violencia y caos inmanejables.

Estamos en presencia de un proceso lento pero efectivo de acumulación de conflictividad. Si este proceso continúa con la misma dinámica y obedeciendo a la misma lógica de choque y convulsión, más temprano que tarde habrá de desembocar en lo inevitable: estallidos sociales de gran envergadura que sumirán al país en una situación tan lamentable como indeseable.

Se hace necesario revisar a fondo la estructura institucional del Estado, reformar de verdad los órganos operadores de justicia, depurar sus filas y generar nuevos valores de cultura política democrática en todos los eslabones y rincones del Estado y de la sociedad. El país reclama una verdadera transformación. Se vuelve inevitable su refundación profunda.

ALERTA CIUDADANA

El escandaloso fraude llevado a cabo en el proceso electoral del año pasado, no solo generó un déficit enorme de legitimidad política y jurídica al actual gobierno sino que también sumió al país en un conflicto que parece interminable y cuya solución se prolonga demasiado en el tiempo y en el espacio políticos de la nación.

Se hace necesario encontrar una salida del conflicto para, después, buscar y hallar una solución a la crisis. La salida del conflicto podría encontrarse en el diálogo, pero ya vimos que esta fórmula no funcionó. La solución a la crisis debería encontrarse por la vía de una reforma electoral profunda y democrática, que le devuelva credibilidad a las urnas y frene el proceso de desafección política y desencanto democrático que actualmente vive la sociedad hondureña.

La ciudadanía debe estar ALERTA y atenta a estos dos procesos simultáneos: la salida del conflicto y la solución de la crisis poselectoral. Para ello debe movilizarse constantemente, reclamando sus derechos y exigiendo el relevo necesario en los mandos políticos. Una sociedad inerte no es viable, menos en momentos de crisis decisivas como el que estamos viviendo. La ciudadanía movilizadada es la única garantía para hacer realidad los cambios y la transformación profunda que Honduras necesita.

La salida institucional debe pasar por nuevas elecciones generales, anticipadas de ser posible, que estén regidas por una nueva arquitectura jurídica para competir en condiciones equitativas, incluyentes y democráticas. Solamente así los resultados electorales gozarán de la confianza suficiente y la credibilidad necesaria para contribuir a la verdadera transformación y construcción democrática de Honduras. La salida de la crisis y el relevo del gobierno no están en manos de los militares ni de los políticos tradicionales. Están en manos de nosotros, los ciudadanos. Ha llegado la hora del cambio.



El CEDOH retoma una iniciativa impulsada en 2006 como un proceso de concientización e incidencia sobre diversos temas de interés nacional. El propósito de este sistema de alerta es informar a la ciudadanía, a los diputados del Congreso Nacional, a los funcionarios y empleados del poder Ejecutivo y del poder Judicial, sobre temas sensibles cuyo desconocimiento puede inducir a una toma de decisiones equivocada, provocando un serio retroceso en el proceso de construcción democrática que vive nuestro país.